

## Survival responde a Wilderness Safaris 10.11.2010

El artículo de James Suzman de 2002, que está circulando ahora Wilderness Safaris como un supuesto “estudio independiente... de un investigador de Cambridge”, no tiene nada que ver con lo bueno o malo del alojamiento de la empresa construido en 2009 en territorio bosquimano. Su intención es desacreditar a Survival International. ¿No habrían mostrado más respeto por los clientes de Wilderness Safaris si les hubieran dicho que Survival ya escribió una contestación al artículo de Suzman en el momento de su publicación?

Survival se ha preocupado por dar el punto de vista de Wilderness; sin embargo, esta empresa turística que se autodenomina “ética” ha hecho lo contrario, y ha llegado incluso a censurar los comentarios sobre la polémica en su página de Facebook. ¿Podría ser porque la postura de Survival se sostiene mejor que la suya propia? La empresa, por ejemplo, nunca ha negado que su alojamiento está situado en territorio bosquimano, ni que haya hecho algún intento por lograr el consentimiento de los bosquimanos, tal y como está obligada a hacer de acuerdo a los principios de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (un hecho que comunicamos a la empresa en 2008 antes de que se construyera el alojamiento). Al igual que las empresas mineras y madereras que se apoderan de las tierras indígenas en otros lugares, Wilderness Safaris se escuda tras las leyes nacionales que violan los derechos de los propietarios tradicionales de las tierras.

Resucitar el artículo de James Suzman es un gol en propia puerta de Wilderness, ya que está muy lejos de ser el “investigador independiente” que dice ser. Hace más de diez años, Suzman pidió a Survival que financiara su trabajo (nosotros declinamos su oferta); con posterioridad preguntó a la organización de los bosquimanos si podía trabajar en la Reserva de Caza del Kalahari Central (ellos rehusaron); fue contratado por De Beers a comienzos de esta década, y poco después le ofrecieron un trabajo permanente en la empresa (él aceptó, y ahora es el jefe de “ciudadanía corporativa” de la empresa). ¿De verdad piensa Wilderness que es un “investigador independiente”?

Antes de pasar a trabajar como alto ejecutivo de De Beers, Suzman había dejado claro que, al contrario de lo que De Beers decía por aquel entonces, la gente en Botsuana había sido a menudo desplazada para dejar paso a las minas de diamantes. Por supuesto, nosotros ya lo sabíamos; prácticamente nos lo había confesado dicho el general Merafhe, ahora vicepresidente de Botsuana, en 2001. Al año siguiente, Suzman aseguró valientemente que “De Beers no tenía planes de minar” en la reserva. Esto era un intento de contradecir nuestra afirmación de que las expulsiones de los bosquimanos tenían como origen el hallazgo de diamantes. Aunque De Beers aseguró hasta la náusea que su hallazgo era “subeconómico”, un alto ejecutivo nos dejó bastante claro, años después, que en realidad era la campaña de Survival la que estaba ralentizando la minería. Finalmente, De Beers vendió la supuestamente “subeconómica” concesión a Gem Diamonds, quien la valora en 3.300 millones de dólares y pretende, falsamente, que tiene el consentimiento de los bosquimanos para seguir adelante con la mina.

Suponemos que Wilderness Safaris está de acuerdo con el artículo de Suzman o de lo contrario no le habría dado difusión. Esto explicaría, desde luego, por qué elige ignorar los derechos indígenas estableciendo su alojamiento en territorio bosquimano: Suzman no cree en ellos para el contexto africano y suponemos que Wilderness está de acuerdo con él.

Suzman dice que el concepto de derechos de pueblos indígenas es “tan inapropiado para el África postcolonial que ningún país africano ha considerado seriamente su ratificación”. De hecho, esto no tiene ningún sentido: casi todos los estados africanos (Botsuana incluida) votaron a favor de la Declaración de Naciones Unidas de 2007 que reconoce, sin lugar a dudas, los derechos indígenas. Uno de ellos, la República Centroafricana, también ha ratificado la convención de 1989 que Suzman tanto desdeña. Además, el Tribunal Supremo de Botsuana reconoció el “título nativo” (algo que ya está bien establecido en otros continentes) en 2006. Cuando asegura que África nunca reconocerá los derechos indígenas (algo sobre lo que es muy mordaz), Suzman se une a aquéllos que simplemente no quieren que estos derechos sean reconocidos. No es sorprendente que entre ellos nos encontremos a los que le pagan en De Beers. Puede que Wilderness apoye esta postura, pero no así el resto del mundo.

Suzman también declaró, sin dar lugar a dudas, que las acciones de Botsuana en el Kalahari Central no eran ilegales, pretendiendo así atribuirse un conocimiento de la ley que luego fue contradicho por el propio Tribunal Supremo de Botsuana que, muy al contrario, determinó que el trato del Gobierno a los bosquimanos era ilegal e inconstitucional.

Wilderness se equivoca al pensar que la “investigación independiente” de Suzman desacredita a Survival. En todo caso, dicha investigación y los acontecimientos posteriores muestran que Survival ha tenido razón desde el principio.

El comunicado emitido por Wilderness Safaris el 24 de octubre contiene numerosos errores. Es el resultado inevitable de su decisión de acatar el mensaje del Gobierno. Por ejemplo, dice: “Survival International parece haberse implicado a principios de esta década, cuando [el Gobierno de Botsuana] retiró los servicios a los residentes [de la reserva] y se completaron los realojamientos”. Y deja al margen el hecho de que Survival comenzó a trabajar en el caso en los años 70 (y se reunió por primera vez con funcionarios de Botsuana para hablar de las expulsiones con las que amenazaban a comienzos de los años 80), lo cual es una forma extraordinaria de describir la violencia de las expulsiones forzosas, cuando cientos de bosquimanos fueron metidos en camiones y muchos recibieron amenazas de muerte si no se iban. El Tribunal de Botsuana determinó que las expulsiones eran ilegales e inconstitucionales, pero Wilderness Safaris no parece estar de acuerdo: describe el caso judicial como un mero desafío a la “decisión de poner fin a los servicios y retirar los permisos especiales de caza”. En realidad, el caso giraba en torno al derecho de los bosquimanos a vivir en sus tierras ancestrales.

El comunicado continúa diciendo que el “primer contacto” de la empresa con Survival se produjo en marzo de 2010. Esto también es falso: escribimos a la filial de Wilderness encargada del alojamiento, Safari Adventure Company, el 12 de mayo de 2008. Les indicamos entonces que la empresa tenía obligación de conseguir el consentimiento de los bosquimanos antes de proceder. Les dijimos: “Es concebible que el Gobierno les haya concedido derechos sobre una parte... de(l)/los territorio(s) [bosquimanos]... No le corresponde hacerlo, por supuesto, porque conoce bien las fronteras de ambos territorios... y sabe que el Tribunal ha confirmado el derecho de los bosquimanos a ocuparlos. Si esto es lo que de todas formas ha hecho el Gobierno, habrá violado los derechos constitucionales de sus propios ciudadanos (otra vez). Por razones obvias, ustedes querrán distanciarse de tales cargos”.

A continuación le ofrecimos a la empresa mapas que muestran las fronteras de los territorios bosquimanos. No recibimos respuesta.

Los “asesores legales” de Wilderness Safaris afirman ahora que el Gobierno de Botsuana “tiene el derecho a decidir qué hacer [con la reserva]”, porque es territorio del estado. También esto es incorrecto. Tal y como dejó bien claro el Tribunal, los bosquimanos tienen derechos tradicionales sobre la tierra estatal que existen desde antes de la existencia del propio estado. El Gobierno no puede, para empezar, expulsar a los bosquimanos, al menos no sin incumplir sus propias leyes, ¡otra vez!

Repetir lo “ético” que uno es está bien, pero debería estar respaldado por hechos. Wilderness Safaris dice que la empresa nunca interferirá con los derechos de los bosquimanos, pero ya lo ha hecho, al establecer un alojamiento, pista de aterrizaje y piscina, etc. en el territorio tradicional bosquimano sin molestarse siquiera en pedir consentimiento. En realidad, ha robado esta tierra a los bosquimanos. La empresa finaliza asegurando que “está dispuesta a trabajar con [el Gobierno de Botsuana] para concluir este asunto rápidamente y con éxito”. ¿Realmente no se da cuenta de que el Gobierno violó sus propias leyes e incluso la constitución, y que la única “solución” que está dispuesto a aceptar es el robo de la tierra bosquimana a cambio de los beneficios que sacará del turismo y la minería?